## La Lucha

## Sólo el valor civil ataja la impunidad

ontra la impunidad, el valor de la denuncia, pública y penal en el caso de la violación sexual, recobró su vigencia absoluta recientemente en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, en donde un "mozalbete", prepotente, con dinero y poder, atacó el 12 de octubre a una jovencita de 14 años, pensando en que nadie lo iba a perseguir.

Renato Ravelo Lecuona es un intelectual, un historiador comprometido con los derechos de los campesinos. Su esposa, Judith Rodríguez Galarza, también trabaja en la promoción social. Renato jamás había pensado sobre las repercusiones de lo que significa una violación como ataque a la libertad: "es la

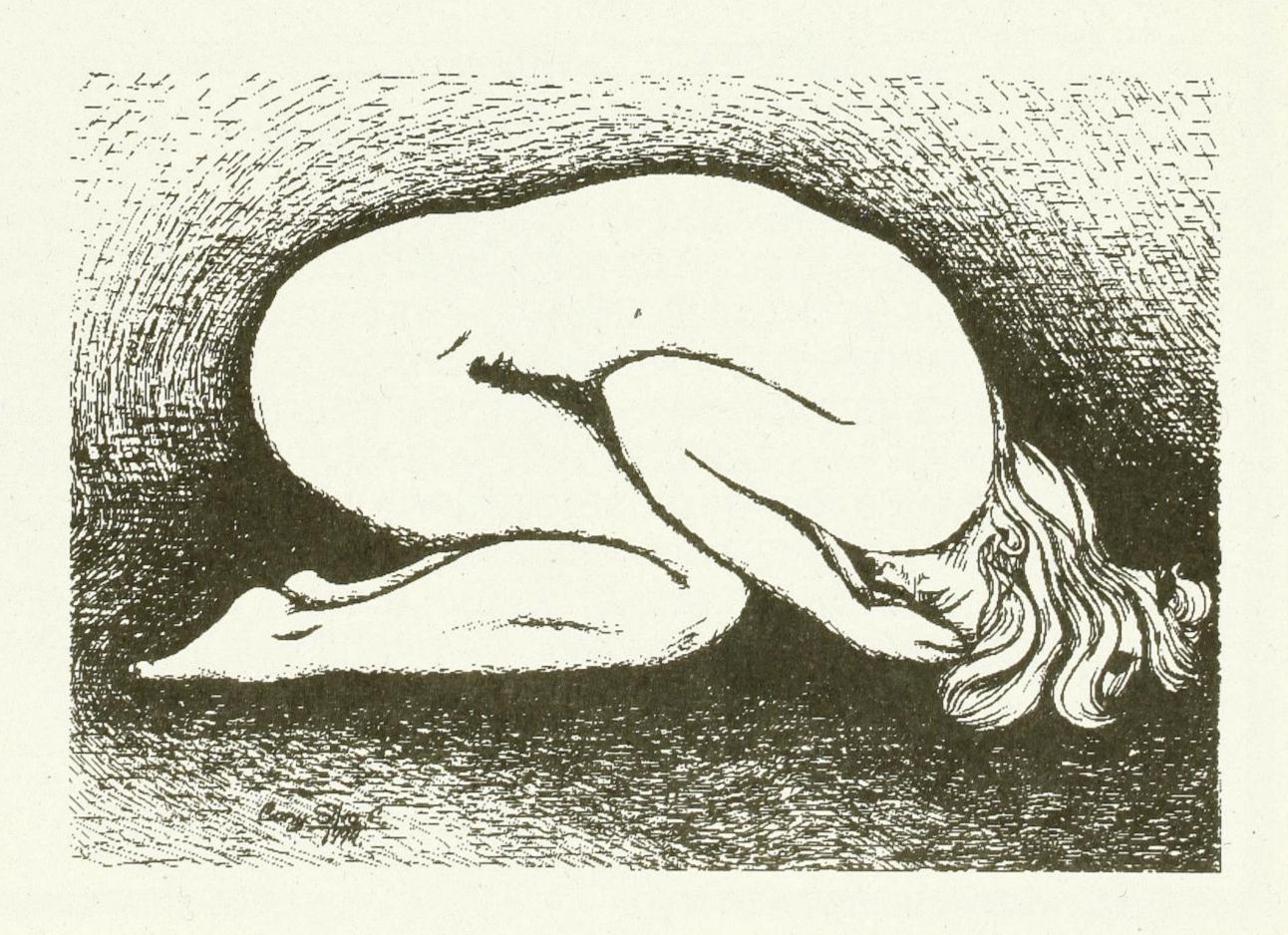
pérdida de varias libertades: la sexual, la de libre tránsito, la de no 
tener miedo, ..." y 
es así como se 
explica la resuelta 
decisión de él y su 
compañera, en 
diálogo y discusión 
con su hija, para 
desde el primer 
momento enfrentar 
públicamente el 
ataque a Irina.

"Tomamos esta determinación porque los abusos sexuales son un mal social creciente que generalmente quedan en el anonimato y gracias a ello se propagan con impunidad", señala la declaración escrita que el ma-

trimonio presentó a la prensa el 17 de octubre.

El delincuente, consignado ante el juez, con auto de formal prisión, es Omar Solis Reséndiz, originario de Acapulco, tiene 22 años y está inscrito en el cuarto año de derecho en la Universidad Autónoma de Guerrero. Utiliza lentes oscuros, corte de pelo y ropa justo en el estilo "narcotelevisivo" y según todos los indicios pertenece al Frente Juvenil Revolucionario del PRI, del que su primo es el dirigente y eso lo hace sentirse fuera de la ley.

Este caso, a diferencia de otros, es prueba fiel de que se ha sembrado en tierra fértil desde el movimiento feminista la lucha por analizar, difundir, estudiar y



atender el problema de la violencia sexual. Renato señala que siempre "habíamos sido espectadores indignados pero pasivos ante estos abusos del que ahora somos víctimas". Llegó a la conclusión de que "callar es egoísmo y falsa vergüenza". Con esa actitud concitó el profesor-investigador toda clase de solidaridades. Lo más importante es que este hecho lamentable ha puesto el tema a reflexión en momentos dónde no pareciera sorprendernos ya nada. Las estadísticas de violación -una cada cinco minutos en el Distrito Federal-, han vuelto a gran parte de la población "casi insensibles". Una revisión en la prensa bastaría para probar que así es. No conocemos hasta ahora de protesta colectiva sobre el caso de los niños violados en una guardería particular de la que dio cuenta La Jornada el viernes 21 de octubre, por ejemplo.

En el caso de Irina -La Jornada 29 de octubre- el mismo día que fue engañada, drogada y atacada, el asunto se empezó a ventilar en los medios. Eso hizo posible las solidaridades y en principio, enfrentar la posible impunidad. También contó la decisión civil y valiente de los padres de la jovencita que se lanzaron a buscar al culpable y directamente, ellos, lo detuvieron el 13 de octubre. También, atinadamente los poderes y la disposición de profesionales sin prejuicios, hizo posible recabar todas las pruebas que evidencían la responsabilidad de Solís Reséndiz.

Lo que preocupa en el proceso que ya se ha iniciado, es la posibilidad de que el olvido, la burocracia instalada en los asuntos de la justicia en México o la corrupción pudieran abrir el espacio de la impunidad. Existen formados un Comité de Padres de Familia que se cimbraron con el hecho, una comité de apoyo al que se han unido personas, profesores, trabajadores de las más distintas actividades, sólo en el Hospital General de Chilpancingo se reunieron firmas de protesta que, sumadas a otras muchas de ciudadanos y ciudadanas, ya son hoy más de mil. Esta campaña, que puede o no incidir en el ánimo del juez Angel Valle Vargas, sí ha permitido reflexionar sobre el fenómeno. Se ha ido más lejos. El asunto fue discutido por el Consejo Universitario de la UAG y el delincuente también será juzgado por esa institución a la que le ha faltado al respeto.

Este caso, hace notar la ex diputada Ma. Luisa Garfias Marín, muestra una de las aristas más tremendas de una sociedad donde la violencia se halla a cada paso. Luchar contra la impunidad se ha convertido en militancia civil, agrega, para este caso "en el que estamos obligadas", pero también para mostrar al público que denunciar y difundir son pasos necesarios para ir enfrentando el mal. Ir más allá, dijeron a coro las integrantes de Mujeres Guerrerenses por la Democracia que han rodeado de apoyo y solidaridad a la familia desde el primer día.

Ir más allá en la discusión de la violencia sexual involucra el análisis de la desigualdad femenina, el compromiso de las autoridades para revisar leyes y modos en la investigación de estos casos. Para Irina el

compromiso de la subprocuradora Violeta Para en Chilpancingo, es no permitir que se introduzca en el proceso ninguna influencia y atajar cualquier amenaza, que el jovenzuelo prepotente ya empezó a proferir. Al Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jesús Araujo, sólo se le solicita legalidad y decoro, en una entidad donde muchos casos han quedado sin resolver, aparentemente por la indolencia de los jueces.

Pero ir más allá, para la procuradora de la mujer en Guerrero, Dolores Rueda Navarro, es educar contra la discriminación de la mujer, dotar de recursos a los programas y proyectos para ampliar la educación en los derechos humanos de las mujeres y entrar a la discusión del tema sin prejuicios.

El Comité de Apoyo a Irina, no es un comité ciego. Sus integrantes, entre ellos profesores universitarios, trabajadoras y trabajadores de la universidad, gente cercana a la familia, estudiantes, buscan dar seguimiento, discutir en otros foros el problema y mantener a la población informada sobre los quehaceres de la justicia penal.

Irina, a los 14 años según todos los pronósticos, saldrá bien librada de este atropello a su integridad física y a su libertad, porque cuenta con algo principal, el amor de quienes la rodean. Pero existen en México miles de Irinas que todavía creen o les hacen creer que no tiene sentido la denuncia o que es una vergüenza hablar del ataque sexual, aún cuando personalmente uno lo haya sufrido. El caso de Irina es una muestra cívica, como lo fue en su momento el de las 19 jóvenes del sur; como lo es hoy el de las tres indígenas tzeltales atropelladas por elementos del ejército. (CIMAC).

